

JOSE TOMÁS TENORIO LABRA
 Corresponsal en España

Un problema extendido en el país:

Entre juicios, escándalos y advertencias del exterior, corrupción genera preocupación en España

Indicadores muestran que la percepción de este fenómeno en el país ha empeorado, y diversos organismos internacionales alertan que no se hace lo suficiente para frenarlo.

Un breve repaso por la agenda informativa de abril en España deja entrever un patrón que se repite: el inicio del juicio por el "caso Kitchen", que involucra al último gobierno del Partido Popular (PP, centroderecha); el inicio del juicio por el "caso Koldo", que salpica al oficialista Partido Socialista (PSOE); la decisión de un magistrado de enviar a juicio a la esposa del Presidente Pedro Sánchez; y la advertencia del Consejo de Europa sobre la "necesidad urgente" de aplicar una estrategia anticorrupción en el país. Es la mancha de esa corrupción la que hoy España no logra alejar de sí misma, marcada por una lenta respuesta de autoridades frente al problema y una preocupación cada vez más evidente entre ciudadanos y organismos del exterior.

Entre escándalos que se han ido sumando a lo largo de los últimos años, con altos dirigentes políticos como protagonistas de tramas corruptas, una de las demostraciones más claras del deterioro en España por este fenómeno llegó de la mano del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Publicado en febrero pasado, el reporte reveló un nuevo descenso de España en su *ranking* de 182 países, al ubicarse en el puesto 49, tres posiciones por debajo de 2024, con una puntuación de 55 sobre 100, inferior al promedio europeo de 62 puntos.

Se trata de su peor resultado del siglo, quedando por detrás de naciones como Qatar y Rumanía, mientras que Chile se ubicó en el puesto 31.

A nivel ciudadano, la preocupación por este asunto llegó a tal punto que cerró en 2025 como el cuarto problema más citado por los votantes españoles, con un 8,5% que se refirió a la corrupción como el principal problema de España, quedando solo por detrás de la crisis de vivienda (19%), los problemas políticos en general (10,9%), y el comportamiento del gobierno y los partidos (10,7%). La problemática incluso superó a otras que suelen copar el debate local, como la economía, la inmigración y los altos niveles de desempleo.

Alertas que se multiplican, respuestas que no llegan

El retroceso de España en esta materia también golpea desde el exterior, y desde el año pasado organismos como el Consejo de Europa, la Comisión Europea y la OCDE han alertado sobre la falta de aplicación de medidas para combatir esta problemática, a pesar del repetido discurso del gobierno de Sánchez en el que tanto él como sus ministros defienden su "tolerancia cero" a la corrupción.

A fines de marzo, un reporte de la OCDE profundizó en ello al



EL GOBIERNO de Sánchez ha acusado de un supuesto uso político de la justicia, en medio de causas de corrupción que afectan al oficialismo.

señalar que si bien España cuenta con buenos resultados en la elaboración de leyes anticorrupción, con un marco estratégico que alcanza un 53% de solidez en base a criterios seleccionados por el organismo, la aplicación práctica de estas leyes sufre un importante déficit. Y es que según la OCDE, la nación solo ejecuta un 17% de esas medidas, muy por debajo del 32% que se registra en promedio entre los países de la organización.

Ese aspecto remarcó también el Consejo de Europa al alertar

en abril sobre la "necesidad urgente" de aplicar una estrategia robusta contra la corrupción en España, luego de que en agosto de 2025 el mismo organismo reprochó a la nación por incumplir parcial o totalmente 19 recomendaciones que le hizo a Madrid en 2019 para abordar este problema. Entre esas recomendaciones no cumplidas están medidas para aplicar mayores controles sobre la contratación de asesores políticos, la financiación de partidos, regulación de lobbies, la autonomía de los

órganos de control, y reformas al aforamiento.

"En España asistimos a una crisis institucional inaudita, a la destrucción prácticamente integral de la institucionalidad. Cada vez nos parecemos más a cierta Argentina peronista o a lo que está pasando en México con el gobierno de Morena", afirma Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, quien apunta un desmoronamiento "día a día del Estado de Derecho". "Así las cosas, lo nor-

“En España asistimos a una crisis institucional inaudita, a la destrucción prácticamente integral de la institucionalidad. Cada vez nos parecemos más a cierta Argentina peronista o a lo que está pasando en México con el gobierno de Morena”.

JUAN ANTONIO GARCÍA AMADO
 CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN.

mal es que España empeore, tal como está ocurriendo", señala.

Ataques a la justicia

Si bien los últimos escándalos han golpeado con mayor fuerza al PSOE de Sánchez, la corrupción en España se muestra como algo extendido con incidentes anteriores. El llamado "caso Gürtel", una trama de financiación ilegal en el PP, llevó al fin de su último gobierno en 2018, liderado por Mariano Rajoy, mientras que actualmente se juzga a los implicados en el "caso Kitchen", que salpica a exdirigentes del PP acusados de liderar una operación que utilizó medios del gobierno para espionar y sustraer información de un tesoro del partido, con el fin de evitar más daños a la formación en el marco de la investigación del "caso Gürtel".

A su vez, a mediados de 2025 otro escándalo complicó al PP al alcanzar al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y otras 27 personas por supuestas irregularidades cometidas durante los mandatos de Rajoy (2011-2018). El caso actualmente sigue bajo investigación.

El PSOE suele apoyarse en esos casos para señalar a su gran rival político de corrupción, y para señalar ante el público que la cúpula socialista sí ha colaborado con la justicia cuando miembros de su partido se han visto salpicados por escándalos, como ocurrió con dos ex miembros de la derecha de Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos acusados de protagonizar tramas corruptas. Sin embargo, el

partido oficialista también se ha caracterizado por sus ataques a la justicia en otros casos aún más complejos.

Tanto en casos como el de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, acusada de tráfico de influencias y corrupción, como en el de la inébrica condena e inhabilitación en 2025 al entonces fiscal general Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, el gobierno criticó a los magistrados a cargo de los casos, al acusar un

DESCENSO

España cayó tres puestos, hasta el 49, en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Fue su peor resultado del siglo.

supuesto uso político de la justicia para dañar al Ejecutivo.

Son esos ataques los que llevaron en los últimos meses a diversos organismos judiciales europeos, la Eurocámara y hasta la Comisión Europea, a expresar sus preocupaciones por el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en España, al constatar "presiones indebidas" sobre magistrados.

"Es una deriva preocupante en España, porque está generando una desconfianza severa en el Poder Judicial, y esto está alimentado por parte de responsables políticos para cortocircuitar mediáticamente la debida exigencia de responsabilidades que pueda existir" por hechos de corrupción, asegura Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. "La política no se ha judicializado porque los jueces vayan a castigar a quien ha cometido un delito (...) No podemos disparar contra el juez por cumplir con su función, y no podemos normalizar eso en un Estado democrático de Derecho", agrega.